

IRREALISMO
LÓGICOALEJANDRO
ALMAZÁN*

A FAVOR

@ELALEXALMAZAN

La inminente aprobación de lo que el obradorismo llama “la madre de todas las reformas” no sólo ha desquiciado a los opositores o a los ministros

• EN EL GOBIERNO MEXICANO SABEN QUE EL CHOQUE POLÍTICO CON EU, CANADÁ Y EL PODER JUDICIAL SE INTENSIFICARÁ CUANDO SE PRESENTEN REFORMAS A LAS FISCALÍAS LOCALES

La más reciente intencionalidad de la ministra Norma Piña y su pandilla —pretender quitarle la mayoría calificada a Morena y a sus aliados en el Congreso— ilustra a la Corte como un órgano político que suele amagar con golpes de Estado técnicos. Si bien la reforma al Poder Judicial “no es una reforma a la justicia”, “ni solucionada nada”, como ha dicho el ministro en retiro Arturo Zaldívar, sí se enfoca en lo urgente: remover a los integrantes de la Corte por medio del voto popular, para que no frenen el paquete de reformas que envió AMLD, ni se les ocurra hacerle un *lawfare* a la próxima Presidenta.

La inminente aprobación de lo que el obradorismo llama “la madre de todas las reformas” no sólo ha desquiciado a los opositores o a la infinidad de ministros, magistrados y jueces que ruegan porque la meritocracia, el nepotismo y los pactos políticos continúen como modelo de designación. También los grandes capitales de Estados Unidos y de Canadá se sienten amenazados. Y cómo no:

la reforma perjudicará a esos inversionistas que, a fuerza de amparos y complicidades, expolian los recursos naturales de México.

Tanto les dañará que el Departamento de Estado estadounidense ha tenido que entrometerse de manera abierta a la discusión: primero, a través del embajador Ken Salazar, cuestionando el método de elección de jueces y advirtiendo que “es un riesgo para la democracia en México”. Después, por medio del editorial en el *Washington Post*, parece escrito por un fanático del extractivismo. Graeme C. Clark, el embajador canadiense, tampoco ha ocultado quién le paga y ha alertado que los inversionistas están preocupados. Lejos de someterse, el presidente pausa la relación con ambos diplomáticos como un gesto simbólico; reclama a sus socios comerciales que respeten la soberanía y los llama imprudentes e injerencistas.

Los empleados del Poder Judicial, mientras tanto, se van a paro, marchan, toman el Ángel de la Independencia, mandan una misión a Washington para suplicarle a la CIDH y a la OEA que intervengan, y celebran la solidaridad de estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM. En la búsqueda del apoyo popular, el más importante, fracasan y culpan a AMLD de su frustración.

En el gobierno mexicano saben que el choque político con EU, Canadá y el Poder Judicial se intensificará cuando se presenten reformas a las fiscalías locales, a las policías, a las defensorías públicas, a la solución de controversias, entre otros. Por ahora, la reforma es más política que técnica y será votada. Con la ratificación de la mayoría calificada y la integración de dos senadores, el Plan C está a un voto de arrancar.